

El liderazgo público que Iberoamérica necesita: servir, innovar y cooperar para transformar nuestras democracias.

Ana Belén Chóez Vergara, Ecuador, VII Edición

Vivimos un momento decisivo para Iberoamérica. Nunca antes nuestras sociedades habían enfrentado desafíos tan complejos y simultáneos: la crisis de confianza en las instituciones, el crecimiento de la desigualdad, la inseguridad, la acelerada transformación tecnológica, el cambio climático, los fenómenos migratorios y la demanda de ciudadanos cada vez más informados y exigentes. Estos retos han puesto a prueba la capacidad de los Estados para responder con eficacia y, sobre todo, con legitimidad.

En este contexto, el debate sobre el liderazgo público deja de ser una discusión académica para convertirse en una necesidad estratégica. La calidad de nuestras instituciones dependerá, en gran medida, de la calidad humana y profesional de quienes las dirigen. No existen instituciones fuertes sin servidores públicos íntegros, preparados y profundamente comprometidos con el interés general.

La cooperación regional también adquiere una nueva dimensión. Ningún país iberoamericano posee, por sí solo, todas las respuestas a los problemas contemporáneos. Compartimos desafíos similares y, por tanto, también tenemos la oportunidad de compartir soluciones, aprendizajes e innovación. La fortaleza de Iberoamérica no radica únicamente en su historia común o en el idioma que une a la mayoría de nuestros países; radica en la posibilidad de construir una comunidad de líderes capaces de aprender unos de otros para fortalecer nuestras democracias.

El servidor público del siglo XXI debe responder a una realidad completamente distinta a la de hace apenas dos décadas. Hoy ya no basta con conocer el funcionamiento del Estado o administrar correctamente los recursos públicos. Gobernar implica comprender fenómenos globales, interpretar datos, gestionar crisis, construir consensos, comunicar con transparencia y mantener siempre la capacidad de escuchar a la ciudadanía.

Las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y la digitalización están transformando profundamente la gestión pública. Esto exige funcionarios con competencias técnicas actualizadas, pero también con pensamiento crítico, capacidad de adaptación y disposición permanente al aprendizaje. La innovación dejó de ser un elemento complementario para convertirse en una condición indispensable del buen gobierno.

Sin embargo, las habilidades técnicas solo producen resultados cuando descansan sobre una sólida base ética. La integridad continúa siendo el principal patrimonio de cualquier servidor público. En sociedades donde la confianza institucional ha sufrido importantes deterioros, actuar con transparencia y coherencia no constituye únicamente una obligación legal; representa un compromiso moral con los ciudadanos.

La vocación de servicio tampoco ha perdido vigencia. Al contrario, se vuelve más necesaria frente a la creciente distancia que muchas veces perciben los ciudadanos entre quienes toman decisiones y quienes enfrentan diariamente los problemas públicos. Servir significa comprender que cada política pública tiene consecuencias concretas sobre la vida de las personas y que cada decisión administrativa debe orientarse a mejorar el bienestar colectivo.

Junto con la integridad y la vocación de servicio aparece una tercera característica indispensable: la proactividad. Las instituciones no pueden limitarse a reaccionar cuando los problemas ya se han convertido en crisis. Los servidores públicos deben desarrollar la capacidad de anticiparse, identificar riesgos, innovar y promover soluciones antes de que los desafíos escalen. Esa capacidad de actuar con visión estratégica diferencia a quienes simplemente administran el presente de quienes construyen el futuro.

Pero ningún proceso de transformación institucional será sostenible si no logramos atraer a una nueva generación de jóvenes al servicio público. Durante demasiado tiempo, la política ha sido presentada como un espacio de confrontación permanente, desconfianza y desgaste. Esa narrativa ha alejado a muchos profesionales altamente preparados que podrían aportar enormemente al fortalecimiento del Estado.

Recuperar el prestigio del servicio público constituye uno de los grandes desafíos de nuestra generación. Necesitamos demostrar que la administración pública sigue siendo uno de los espacios donde una persona puede generar el mayor impacto positivo sobre la sociedad. Mientras el sector privado transforma empresas, el sector público tiene la capacidad de transformar comunidades enteras.

Los jóvenes aportan creatividad, nuevas formas de liderazgo y una extraordinaria capacidad para incorporar herramientas tecnológicas en la solución de problemas públicos. Han crecido en entornos digitales, comprenden mejor las nuevas dinámicas de participación ciudadana y poseen una visión más colaborativa del trabajo. Su incorporación resulta indispensable para construir administraciones públicas más ágiles, abiertas e innovadoras.

No obstante, atraer talento no es suficiente. También debemos formar líderes con una profunda conciencia ética y una visión regional. Los desafíos actuales exigen abandonar la lógica de soluciones exclusivamente nacionales para avanzar hacia una verdadera cooperación

iberoamericana. La seguridad, la sostenibilidad ambiental, la transformación digital, la movilidad humana o la competitividad económica requieren instituciones capaces de dialogar, intercambiar experiencias y construir políticas coordinadas.

Precisamente ahí radica el enorme valor de iniciativas como la Fundación Botín. Más allá de ofrecer formación de excelencia, su principal contribución consiste en construir una comunidad iberoamericana de liderazgo público basada en la confianza, el intercambio de experiencias y el compromiso con el bien común.

Las redes de liderazgo representan uno de los activos más valiosos para el fortalecimiento institucional. Cuando un servidor público comparte buenas prácticas con colegas de otros países, cuando aprende de políticas exitosas implementadas en otros contextos o cuando construye relaciones de cooperación que perduran durante años, se generan beneficios que trascienden ampliamente la experiencia individual.

En una época donde los problemas son globales, también deben serlo las conversaciones entre quienes tienen la responsabilidad de resolverlos. La cooperación deja entonces de ser un concepto diplomático para convertirse en una herramienta concreta de innovación pública.

Como representante de una ciudad profundamente dinámica como Guayaquil, he podido comprobar que las mejores políticas públicas nacen del contacto permanente con los ciudadanos. Escuchar, recorrer el territorio, comprender las necesidades reales y mantener una comunicación directa con la comunidad permite tomar decisiones más acertadas y fortalecer la legitimidad democrática.

El liderazgo público no puede ejercerse desde la distancia. Requiere cercanía, empatía y capacidad para construir confianza. Los ciudadanos esperan servidores públicos preparados, pero también humanos; líderes que comprendan que detrás de cada indicador económico existe una familia, detrás de cada trámite administrativo una persona y detrás de cada decisión política una expectativa legítima de mejorar la calidad de vida.

Iberoamérica posee un enorme potencial humano. Contamos con universidades de excelencia, jóvenes altamente capacitados, emprendedores innovadores y una sociedad civil cada vez más activa. Nuestro desafío consiste en canalizar ese talento hacia el fortalecimiento de las instituciones públicas.

La región necesita liderazgos que comprendan que el verdadero poder no consiste en ocupar un cargo, sino en generar transformaciones sostenibles. Necesita servidores públicos que trabajen con una visión de largo plazo, capaces de construir acuerdos por encima de las diferencias políticas y comprometidos con dejar instituciones más fuertes de las que encontraron.

La cooperación regional, la formación permanente y la construcción de redes de liderazgo constituyen herramientas fundamentales para alcanzar ese objetivo. Apostar por ellas significa

invertir en democracias más resilientes, gobiernos más eficaces y ciudadanos que vuelvan a confiar en sus instituciones.

Estoy convencida de que el futuro de Iberoamérica dependerá menos de los recursos naturales que poseamos y mucho más de la calidad del liderazgo que seamos capaces de formar. Si logramos atraer a los mejores talentos al servicio público, fortalecer su formación ética y técnica y consolidar una verdadera comunidad iberoamericana de cooperación, estaremos dando un paso decisivo hacia instituciones más sólidas y sociedades más justas.

Porque las democracias no se fortalecen únicamente con mejores leyes. Se fortalecen, sobre todo, con mejores personas al servicio de los demás. Ese es el liderazgo público que nuestra región necesita y ese debe ser el compromiso de quienes creemos que servir siempre será la forma más noble de ejercer el poder.